

La democracia frente al autoritarismo

por **Fernando García Ramírez**

Lorenzo Córdova concedió a *Letras Libres* su última entrevista como presidente del Consejo General del Instituto

Nacional Electoral (INE). Como cabeza de esa institución le tocó arbitrar la elección de 2018, que dio el triunfo a Andrés Manuel López Obrador, y casi enseguida comenzó a recibir los ataques del presidente. En noviembre de 2022 y en febrero de 2023, por primera vez en la historia de México, millones de ciudadanos en todo el país salieron a defender su institución electoral. Lorenzo Córdova será recordado como un presidente consejero que, con las armas de la democracia, supo enfrentar el autoritarismo presidencial.

Ingresaste al Instituto Federal Electoral en 2011, propuesto, entre otros, por el PRD, que en ese entonces dirigía Andrés Manuel López Obrador. Tu padre fue su amigo. Arbitraste la elección en la que resultó electo presidente. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se dio el desencuentro con López Obrador?

El vínculo que llegué a tener con el licenciado López Obrador se dio a través de mi padre. En su último periodo en el PRD, López Obrador tuvo contacto con él y esta relación continuó hasta que nació Morena, partido del que mi padre fue fundador. Arnaldo Córdova siempre mantuvo su distancia con los líderes del PRD y se mostró muy crítico de las dirigencias personalistas en el partido. López Obrador fue muy generoso en el trato con mi

padre, de quien decía que había sido su maestro. Mi padre no se acordaba, pero lo asumía como algo cierto. Se forjó una amistad entre ellos al grado de que López Obrador fue padrino en la segunda boda civil de mi padre en 2009. Después, a través de muchos amigos en común, como José María Pérez Gay, en varias ocasiones nos reunimos en casa de López Obrador cuando él todavía era presidente del PRD. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones. Públicamente nunca hubo ningún trato descortés, por el contrario.

Al principio de su gobierno, cuando coincidíamos en los actos oficiales, la relación fue igualmente muy cordial. Es cierto que el presidente nunca aceptó un acercamiento, pero desde mi lado nunca hubo una ruptura. En muchas



ocasiones yo planteé que era importante tener una reunión, a fin de explicarle cómo funcionaba el INE y aclararle muchas ideas erróneas que tiene sobre el Instituto. Hay quien argumenta que los ataques en nuestra contra son producto de nuestro rechazo a bajarnos los sueldos. Eso es mentira. Nosotros fuimos el primer órgano que buscó bajar los sueldos de sus altos directivos, antes incluso de la elección de 2018. Lo hicimos en el 2017 en el contexto del gasolinazo. Lamentablemente un colega impugnó ante el Tribunal Electoral y este nos impidió bajarnos los sueldos. Durante el periodo de la transición yo lo platicué con Julio Scherer Ibarra y le dije que había una buena disposición para reducir el sueldo de los altos directivos, los consejeros y los miembros de la junta ejecutiva. El propio

Scherer me dijo que no tenía sentido porque eso se iba a perder en tribunales. Por otra parte, nunca violamos la Constitución. La Constitución prohíbe que un funcionario público tenga una remuneración mayor a la del presidente, pero no se refiere únicamente al sueldo. La remuneración contempla el sueldo y las prestaciones, pero también los beneficios, en especie o económicos, que recibe el funcionario público. Lamentablemente en cuatro años la Cámara de Diputados no ha fijado la remuneración del presidente, de modo que nadie sabe en realidad cuál es. Sin embargo, estoy seguro de que, si se toma en cuenta en dónde vive, su servicio personal, su vestuario, su alimentación y el aseo de sus domicilios, nadie tiene en México una remuneración mayor.

Partiendo del acoso que ha sufrido el INE, ¿crees que el gobierno de López Obrador tiende hacia el autoritarismo?

Creo que el presidente, y el gobierno en general, tiende a la concentración de poder. Consecuentemente, como todo poder, es repelente a los mecanismos de control. El INE es un órgano de control del poder público y privado. Fiscaliza a los partidos, los audita, observa que cumplan la ley. Vigila que los medios respeten las reglas de comunicación política y que los servidores públicos, desde el presidente hasta cualquier funcionario municipal, no violen la neutralidad de una contienda política. Además de organizar elecciones, el INE garantiza la integridad de las mismas y los derechos políticos.

Con un dejo de realismo, reconozco que al gobierno le gustaría que el INE fuera como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un órgano completamente plegado a la voluntad del poder y dispuesto a actuar según sus designios. Que un órgano de control, como el INE, sea incómodo para el poder es parte de su naturaleza.

¿Crees que la reforma electoral de López Obrador –los llamados planes A y B– tenga la finalidad de controlar el órgano electoral de cara a las elecciones del 2024?

El Plan A, sin lugar a dudas, porque dinamitaba los cinco grandes pilares del sistema electoral que hemos logrado establecer y garantizar desde la Constitución: la independencia y la autonomía de los órganos electorales; la existencia de un Servicio Profesional de Carrera altamente especializado que es el garante de que haya elecciones con la calidad técnica que tenemos y con una enorme capacidad operativa; una estructura desconcentrada permanente que le permite al INE construir una relación de confianza con la ciudadanía que hace posible la instalación de casillas; un padrón electoral manejado de manera independiente; y condiciones de equidad de la competencia que implican, entre otras cosas, que los

gobernantes no puedan intervenir en la contienda electoral. Claro que el Plan A era un intento de captura.

El Plan B es distinto porque me da la impresión que su propósito es destacar al INE. Lo confirma el hecho de que busque desaparecer el 85% de las plazas del Servicio Profesional Electoral. Eso deja en evidencia la mentira de que había sido elaborado para ahorrar costos, porque el gasto en liquidaciones es multimillonario. Nosotros estimamos que estaría entre 2,500 y 3 mil millones de pesos, entonces, ¿cuál ahorro? Mi punto es que el Plan B arrasa con todas las capacidades operativas que hoy le permiten al INE organizar elecciones. El objetivo del Plan B es provocar un problema en donde no lo había antes, ¿para qué? No estoy seguro si es para convertir los próximos comicios en un “río revuelto”, porque eso sí sería muy preocupante.

¿Cuál era tu visión de la democracia mexicana en 2011, cuando entraste al IFE como consejero, y cuál es la imagen que tienes en 2023? Nuestra democracia ¿es más fuerte o más débil?

El sistema electoral, entendido como el entramado de procedimientos y criterios, de procesos, reglas e instituciones para renovar pacíficamente el poder, está funcionando. Nunca habíamos tenido un periodo tan largo de tranquilidad y estabilidad política. En estos años se ha propiciado el nivel de alternancia más alto de nuestra historia. La probabilidad que tiene un partido político que ganó una elección de ganar la siguiente ronda electoral es una de cada dos. Hay una enorme diferencia entre el momento en que iniciamos y donde estamos ahora. A pesar de las descalificaciones, la confianza ciudadana en el Instituto ronda entre el 65% y el 75%, lo cual contrasta con el 44% que se tenía hace nueve años. No es casual que la ciudadanía se haya volcado a las calles, no para protestar contra una política pública, sino para defender una institución

que una buena parte de los ciudadanos asumen como propia.

Además de México, en varios países de América Latina ha descendido el aprecio por la democracia. José Woldenberg afirma que esto se debe a que la economía le falló a la gente. ¿A qué atribuyes tú ese descenso?

Coincido con Woldenberg. Uno de los problemas más graves que sufren los gobiernos elegidos democráticamente es su incapacidad para instrumentar políticas públicas que puedan resolver los grandes problemas estructurales de nuestro tiempo: pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad y en algunos casos, como el nuestro, violencia e inseguridad. En consecuencia, el número de personas que estarían dispuestas a renunciar a las conquistas democráticas a cambio de que se le resuelvan sus necesidades vitales aumenta. Eso es un problema. Índices globales, como el de *The Economist*, nos colocan al borde de ser un sistema antidemocrático, pero, paradójicamente, lo que nos salva de caer en esa categoría es la confianza en nuestro sistema electoral. Gracias al INE y a la confianza pública que se le tiene no hemos sido degradados. Esto se puede explicar por dos razones fundamentales. La primera: el INE es una institución que funciona bien y que brinda servicios cotidianos a la ciudadanía, como la credencialización, que son muy apreciados. El segundo: la estabilidad política. Hay una conciencia cada vez mayor de que, además de ser un derecho, el voto es un mecanismo poderosísimo de rendición de cuentas, que nos permite premiar o castigar las buenas o malas gestiones públicas.

El secretario de Gobernación declaró que podrías ser investigado al término de tu gestión. Primero fue el acoso y después la persecución. ¿Qué vías cívicas y legales adoptarás para tu defensa?

En los últimos años, ya perdí la cuenta de cuántas demandas de juicios políticos se han presentado en mi contra.

Tres o cuatro, por lo menos. Por primera vez, en los últimos 32 años, funcionarios electorales fuimos denunciados penalmente, por tomar decisiones en el ámbito de nuestras responsabilidades, y no por cualquier personaje, sino por el entonces presidente de la Cámara de Diputados. Tan absurda fue la denuncia aquella vez que la propia Fiscalía tuvo que desestimarla. Sin embargo, entiendo por qué lo hacen. Para el poder es indispensable señalar a un enemigo del pueblo y un gobierno con vocaciones autoritarias, como el actual, claro que nos va a perseguir. ¿Por qué no nos investigaron cuando estábamos en funciones? El INE es la institución más transparente del Estado mexicano. Incluso, teniendo en cuenta que hoy se espía en México y que hay una animadversión por parte del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quienes nos acusan no han encontrado nada. Es claro que van a irse contra nosotros para validar su narrativa. Como ciudadano que confía en la existencia de un Estado de derecho en México, recurriré, si es necesario, a todas las instancias jurídicas que todavía tenemos a nuestro alcance, aunque esto moleste al poder, y estoy seguro de que los tribunales nos darán la razón.

La raíz política de México, prehispánica y virreinal, es autoritaria y vertical. Luego de un siglo XIX convulso, Díaz restauró el autoritarismo y, después de la Revolución, el PRI lo continuó con ropajes republicanos. Son muy pocos los periodos democráticos en México. ¿Piensas que somos un país democrático o uno que tiende hacia el autoritarismo?

Te voy a hacer una confesión. En mi tesis de licenciatura critiqué mucho aquella idea que Octavio Paz plasmó en *Posdata*, sobre que el presidencialismo mexicano es una secuela de la figura del tlatoani y del virrey. Yo estaba convencido de que, basado en la idiosincrasia del mexicano, Paz nos condenaba. De joven, me rebelé contra esa

idea, pero ahora me temo que México sí tiene una tendencia natural hacia el ejercicio del poder en clave autoritaria, aunque tampoco creo que sea nuestro destino manifiesto. Pienso, eso sí, que México adolece de un presidencialismo constitucionalizado; todas nuestras constituciones han establecido un régimen con una presidencia más o menos fuerte. Al término de la Revolución mexicana, la figura presidencial se convirtió en el punto de inflexión y de articulación de todo el sistema político. Esto a partir de lo que Jorge Carpizo llamaba las facultades metaconstitucionales o del corporativismo mexicano, que Arnaldo Córdova explicó, articulado en torno al partido gobernante. Si bien es cierto que el presidencialismo político decayó con la creación de órganos de control durante la transición democrática, este sigue ahí. También creo, como dice Ricardo Becerra, que México padece de un presidencialismo mental. Cuando un presidente recorre el país, ya sea López Obrador o cualquier otro, todo el mundo se acerca a hacerle una petición. Existe todavía la idea de que el presidente es alguien todopoderoso del que dependen todos los designios de la sociedad y del país mismo. Eso habla de una vocación poco democrática.

Quiero pensar que no es que carezcamos de una vocación democrática, sino que los periodos en los que hemos practicado la democracia han sido pocos. De hecho, hoy vivimos un periodo de tres décadas, que es el más largo de vida democrática en toda nuestra historia. Viendo esto con optimismo te puedo decir que sí creo que existe una tendencia a pensar que necesitamos un líder que nos guíe y que nos resuelva todos los problemas, pero también nunca como ahora hay una conciencia colectiva de que a la democracia se le defiende, de que los derechos políticos no son concesiones gratuitas, sino conquistas que se arrebataban al poder, incluidos los derechos políticos, los derechos democráticos y la institucionalidad democrática.

Si tu optimismo se funda en una ciudadanía activa y participativa, ¿crees que las instituciones resisten el embate autoritario?

Mi optimismo se funda en dos cosas. Por un lado, en la reivindicación de la ciudadanía como la constructora, autora y, por ende, defensora de la democracia en México. En México la democracia no se construyó en un día ni es obra de un solo hombre o de un partido. Es resultado de un compromiso histórico, de distintos actores políticos que, a pesar de sus diferencias ideológicas, decidieron pactar condiciones de acceso democrático al poder. Es también obra de la sociedad mexicana que decidió dejar atrás un pasado autoritario. Hoy es claro que tampoco es obra de una institución. En *Vida y muerte de la democracia*, el politólogo John Keane identifica cómo la democracia, en formas muy exiguas, particulares y diversas, ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, desde Babilonia a nuestros días. Sin embargo, también dice que la democracia muere a manos de aquellos que se dedican a erosionarla, desmontarla, combatirla y, finalmente, destruirla. Son los responsables directos. Pero a la vez hay otros que, indirectamente, por desidia o por miedo, dejaron que la democracia muriera. Son las y los ciudadanos que no hicieron nada por defenderla. Lo que estamos viendo en México es justamente la asunción de la ciudadanía como defensora de la democracia y eso a mí me llena de optimismo.

El otro pilar que me parece indispensable es la fortaleza institucional. Claro que el cambio democrático implicó un conjunto de reformas profundas a la Constitución. Pero el orden constitucional se mantuvo y se adaptó para dar paso a un contexto democrático. Esa adaptación se tradujo en la creación de una nueva institucionalidad en clave democrática. Todos los órganos sociales autónomos, sin excepción, cumplimos hoy funciones que en el pasado realizaba el ejecutivo. ¿Quién

organizaba las elecciones en el pasado? El ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación. ¿Quién era el responsable de la política inflacionaria y cambiaria que hoy establece el Banco de México? Antes era la Secretaría de Hacienda. Y así sucesivamente. Todos estos órganos sustrajeron facultades para ejercer control sobre el ejecutivo y son producto de esta nueva institucionalidad. La propia Corte, a partir de la reforma de 1994, se convirtió en un auténtico tribunal constitucional, que no lo era, y hoy la vemos cada vez más robusta, cada vez más potente.

Ahora presenciamos un embate en contra de esta institucionalidad democrática particularmente a través de cinco ejes. El primero es la descalificación franca y abierta desde el poder. El segundo, el acoso personalizado contra los titulares de esos órganos. El tercero es la asfixia presupuestal. El cuarto, los cambios legales. Y, finalmente, el quinto, la captura institucional.

En algunos casos, este hostigamiento ha tenido éxito: sucedió con la CNDH, convertida hoy día en un apéndice del gobierno. Pero también en otros casos encontramos instituciones que han resistido. El INE es probablemente la más emblemática, aunque no la única. Lo que está ocurriendo con la Corte y el Poder Judicial en su conjunto a mí me llena de optimismo.

Sociedad e instituciones no son ámbitos aislados. Una institución que cuenta con el respaldo ciudadano será mucho más fuerte a la hora de tomar decisiones, en particular si estas incomodan al poder. De este modo tenemos dos fortalezas: una sociedad que está dispuesta a defender sus conquistas democráticas e instituciones que son lo suficientemente robustas para resistir los embates del poder. —

Esta entrevista puede leerse completa en letraslibres.com

FERNANDO GARCÍA RAMÍREZ es crítico literario y editor general del sitio web de *Letras Libres*. Mantiene una columna en *El Financiero*.